



# Asamblea General

Distr. general  
22 de mayo de 2020  
Español  
Original: inglés

## Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

### Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 87º período de sesiones, 27 de abril a 1 de mayo de 2020

**Opinión núm. 9/2020, relativa a Songolo Abwe, Bahome Amisi, Mulenda Amisi, Ababa Anito, Dax Byamungu, Dominique Nepanepa Kahenga, Kibunga Kasindi, Mwenelwata Kitungano, Sikabwe Kiza, Charles Anzuruni M'massa, Sukuma Maenda, Mathias Mafataki Mahano, William Riziki, Amisi Shomari, Kaskil Sumail y Jacque Nsimba Vela (Mozambique)**

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 27 de septiembre de 2019 al Gobierno de Mozambique una comunicación relativa a Songolo Abwe, Bahome Amisi, Mulenda Amisi, Ababa Anito, Dax Byamungu, Dominique Nepanepa Kahenga, Kibunga Kasindi, Mwenelwata Kitungano, Sikabwe Kiza, Charles Anzuruni M'massa, Sukuma Maenda, Mathias Mafataki Mahano, William Riziki, Amisi Shomari, Kaskil Sumail y Jacque Nsimba Vela. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los



Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

### **Información recibida**

#### *Comunicación de la fuente*

4. El caso presentado al Gobierno en la comunicación de 27 de septiembre de 2019 se refería a los 16 refugiados y solicitantes de asilo que se nombran a continuación, que vivían en el campamento de refugiados de Maratane, situado en la provincia de Nampula (Mozambique).
5. Anzuruni Charles M'massa nació en 1981. Procede de la República Democrática del Congo y se le reconoció la condición de refugiado el 12 de diciembre de 2011.
6. Mathias Mafataki Mahano nació en 1957. Procede de la República Democrática del Congo y se le reconoció la condición de refugiado el 29 de junio de 2006.
7. Kibunga Kasindi nació el 12 de septiembre de 1959. Procede de la República Democrática del Congo y se le reconoció la condición de refugiado el 12 de diciembre de 2011.
8. Songolo Abwe nació en 1982. Procede de la República Democrática del Congo y se le reconoció la condición de refugiado el 17 de diciembre de 2004.
9. Mulenda Amisi nació en 1975. Procede de la República Democrática del Congo y se le reconoció la condición de refugiado el 20 de febrero de 2008.
10. Sukuma Maenda nació en 1978. Procede de la República Democrática del Congo y se le reconoció la condición de refugiado el 29 de junio de 2006.
11. Mwenelwata Kitungano nació en 1979. Es un refugiado procedente de la República Democrática del Congo.
12. Amisi Shomari nació el 28 de septiembre de 1958. Es un refugiado procedente de la República Democrática del Congo.
13. Kaskil Sumail nació en 1994. Es un refugiado procedente de la República Democrática del Congo.
14. Jacque Nsimba Vela nació en 1963. Es un refugiado procedente de la República Democrática del Congo.
15. Ababa Anito nació en 1988. Es un refugiado procedente de Etiopía.
16. Dominique Nepanepa Kahenga nació en 1979. Es un solicitante de asilo procedente de la República Democrática del Congo.
17. William Riziki nació en 1984. Es una solicitante de asilo procedente de la República Democrática del Congo. Su solicitud se registró el 19 de abril de 2010.
18. Sikabwe Kiza nació en 1964. Es un solicitante de asilo procedente de la República Democrática del Congo. Su solicitud se registró el 13 de junio de 2006.
19. Bahome Amisi nació el 11 de diciembre de 1975. Es un solicitante de asilo procedente de la República Democrática del Congo. Su solicitud se registró el 18 de agosto de 2008.

20. Dax Byamungu nació en 1979. Es un solicitante de asilo procedente de la República Democrática del Congo. Su solicitud se registró el 23 de junio de 2005.

#### Detención y privación de libertad

21. Según la fuente, las 16 personas a que se refería la comunicación fueron detenidas el 17 de enero de 2019, alrededor de las 22.00 horas, en el campamento de Maratane por 24 agentes, entre los que había policías, funcionarios del Servicio Nacional de Investigación Criminal y funcionarios del Servicio Nacional de Migración.

22. Al parecer, los agentes los esposaron y golpearon delante de sus familias, lo cual, según la fuente, constituyó una humillación innecesaria y un uso excesivo de la fuerza. No se les presentó ninguna orden judicial ni se les informó de los motivos de la detención. Tampoco se les informó de ninguna acusación penal que pesara en su contra cuando fueron recluidas en las instalaciones de la policía el 17 de enero de 2019. Hasta la fecha, no se les han comunicado los motivos de su detención y privación de libertad.

23. La fuente explica que, cuando los abogados de los 16 interesados solicitaron información sobre su detención a la policía de la República de Mozambique, las autoridades los informaron de que su reclusión era una mera detención administrativa, y añadieron que la policía no tenía ninguna información sobre los motivos de la privación de libertad. La policía informó asimismo a los abogados de que se limitaba a ofrecer sus instalaciones de detención para uso de las autoridades de inmigración. Las autoridades de inmigración no accedieron a ninguna de las solicitudes que les presentaron los abogados para que se reunieran con ellos y examinaran la privación de libertad de las 16 personas.

24. Del 17 al 19 de enero de 2019, las 16 personas permanecieron recluidas en una comisaría de policía de Nampula (provincia de Nampula). El 19 de enero de 2019, la policía las trasladó a la tercera comisaría de Pemba (provincia de Cabo Delgado), donde siguen recluidas. Ni la policía ni los funcionarios de inmigración informaron a las 16 personas del motivo de su traslado de la provincia de Nampula a la provincia de Cabo Delgado.

25. Antes de ser detenidas, las 16 personas habían estado viviendo en Mozambique durante al menos ocho años. Todas ellas tienen familiares que viven en el campamento de Maratane, los cuales no disponen de medios para viajar a Pemba a visitarlos. Además, el viaje por carretera a Pemba puede ser muy peligroso debido a los continuos ataques violentos que se registran en la provincia de Cabo Delgado.

26. La fuente explica además que, el 23 de enero de 2019, el Gobierno intentó expulsar a siete hombres del grupo, a saber, los Sres. Bahome Amisi, Byamungu, Kasindi, Kitungano, M'massa, Mahano y Sukuma, a la República Democrática del Congo. No se les notificó que se hubiera dictado ninguna orden de expulsión, ni se les permitió interponer un recurso. Según el testimonio de los siete hombres, los funcionarios de inmigración mozambiqueños los obligaron a embarcar en un vuelo con destino a Kinshasa. Sin embargo, cuando llegaron al aeropuerto de Kinshasa, el funcionario de inmigración les denegó la entrada y ordenó que fueran devueltos a Mozambique.

27. Según la fuente, el funcionario de inmigración de Kinshasa alegó que los documentos de viaje de emergencia expedidos a los hombres por la Dirección Provincial de Migración de Cabo Delgado no demostraban que fueran ciudadanos de la República Democrática del Congo. En ningún momento durante la expulsión se les permitió disponer de esos documentos de viaje. Los siete hombres dijeron que el funcionario de inmigración también había afirmado que no podían regresar a su hogar, en la región de Kivu, debido al aumento de la inestabilidad política e inseguridad ante la toma de posesión del nuevo presidente, prevista para el día siguiente. Los siete hombres fueron devueltos a Mozambique. Durante el viaje de regreso, fueron retenidos tres días en el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi, a la espera de embarcar en un vuelo con destino a Mozambique. El 26 de enero de 2019, los siete hombres llegaron a Pemba y fueron trasladados de nuevo a la tercera comisaría de policía.

28. La fuente también indica que, el 12 de marzo de 2019, los abogados presentaron una solicitud para que se concediera la libertad provisional a las 16 personas, en la que alegaban

que su detención había sido ilegal por haberse practicado sin orden judicial. Los abogados observaron además que a ninguna de las 16 personas se le había notificado que se hubiera incoado ningún procedimiento administrativo o penal en su contra. El Tribunal Provincial de Cabo Delgado aún no se ha pronunciado sobre la solicitud. Dos semanas más tarde, durante una vista celebrada en el Tribunal Provincial de Pemba para examinar la solicitud de libertad provisional, el representante de la Dirección Provincial de Migración de Cabo Delgado afirmó que el intento de expulsión respondía a una decisión oral del Ministro del Interior en la que se ordenaba la expulsión de las 16 personas por su presunta participación en una manifestación que había tenido lugar en el campamento de Maratane el 5 de octubre de 2015 y durante la que se habían causado daños a las instalaciones del campamento. Sin embargo, la fuente destaca que, en mayo de 2017, el Tribunal Provincial de Nampula declaró a las 16 personas no culpables de los daños causados en el campamento.

29. La fuente afirma que, el día de la vista, los 16 interesados no estuvieron presentes en la sala. La policía explicó ante el Tribunal que los interesados no estaban bajo su custodia y, por tanto, no era su responsabilidad llevarlos a la vista. La policía observó que se limitaba a proporcionar el espacio que le había solicitado la Dirección Provincial de Migración de Cabo Delgado.

#### Análisis jurídico

30. Como se ha explicado, la fuente recuerda que, el 17 de enero de 2019, por la tarde, la policía y los funcionarios de inmigración llegaron al campamento de Maratane. Al parecer, golpearon, esposaron y detuvieron a las 16 personas a que se refiere la comunicación delante de sus familias. No tenían ninguna orden judicial. El 19 de enero de 2019, la policía trasladó a los 16 detenidos de Nampula a la tercera comisaría de Pemba. Los detenidos no fueron informados del porqué de su traslado a Pemba (Cabo Delgado), el cual dificultó las visitas familiares. No se les han comunicado los motivos por los que permanecen reclusos. Por consiguiente, la fuente sostiene que Mozambique ha vulnerado el derecho de los interesados a un juicio imparcial, en particular sus derechos a no ser sometidos a detención o prisión arbitrarias, a ser informados de las razones de su detención y de las acusaciones formuladas en su contra y a la presunción de inocencia, consagrados en los artículos 9, 14 y 17 del Pacto y en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

31. La fuente afirma que Mozambique tampoco llevó a las 16 personas ante un juez sin demora para que tuvieran la oportunidad de impugnar la legalidad de su detención y privación de libertad. Permanecen reclusos desde el 17 de enero de 2019 y, transcurridos ocho meses desde su detención, no han sido llevados ante un juez. Por tanto, Mozambique está vulnerando el derecho que los asiste en virtud del artículo 9, párrafo 3, del Pacto, el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 6 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos a ser llevados sin demora ante un juez y a ser juzgados dentro de un plazo razonable o a ser puestos en libertad.

32. Además, la fuente alega que, desde que fueron detenidas, no se ha ofrecido a las 16 personas la posibilidad de solicitar ningún tipo de revisión administrativa o judicial de su privación de libertad ni de interponer un recurso contra ella, lo que constituye una vulneración del artículo 3 del Pacto.

33. La fuente explica que, el 12 de marzo de 2019, los abogados presentaron una solicitud para que se concediera la libertad provisional a los 16 refugiados y solicitantes de asilo, pero el Tribunal Provincial de Pemba todavía no se ha pronunciado al respecto. Según la fuente, esto constituye una vulneración de las debidas garantías procesales que asisten a los interesados en virtud de los artículos 9, párrafo 2, y 14 del Pacto, y los artículos 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular del derecho a ser informados sin demora de las acusaciones formuladas en su contra.

34. Además, la fuente afirma que, en el contexto de su privación de libertad en Mozambique, las 16 personas han permanecido reclusas en la tercera comisaría de policía de Pemba desde el 19 de enero de 2019. En un momento dado, no se les proporcionaron alimentos durante 25 días consecutivos y tuvieron que pagar a alguien para que les comprara pan y agua. Tampoco se les suministra la asistencia médica necesaria. Dos de

ellas padecían malaria y las autoridades no accedieron a llevarlas al hospital hasta que estuvieron en estado crítico. Las instalaciones en que se encuentran reclusas resultaron dañadas por el ciclón Kenneth en abril de 2019. La comisaría de policía se inundó, y no se hicieron reparaciones para reacondicionar las instalaciones de detención. La fuente también denuncia una carencia de instalaciones de saneamiento. Por ejemplo, los 15 hombres y 1 mujer se encuentran reclusos en la misma celda y no tienen acceso a un inodoro. Tienen que beber el agua de color amarillo que sale del lavabo si no tienen dinero para que alguien les compre agua embotellada. La fuente concluye que los malos tratos sufridos durante la detención y las condiciones padecidas durante la privación de libertad entrañan una vulneración del artículo 7 del Pacto y del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

35. Por los motivos expuestos, la fuente considera que la detención y la privación de libertad de las 16 personas son arbitrarias y se inscriben en las categorías I, III y IV.

#### *Respuesta del Gobierno*

36. El 27 de septiembre de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno siguiendo su procedimiento ordinario de comunicaciones y le solicitó que, a más tardar el 26 de noviembre de 2019, proporcionara información detallada sobre la situación en que se encontraban las 16 personas a que se refería la comunicación, así como observaciones en relación con las alegaciones de la fuente. Además, el Grupo de Trabajo instó al Gobierno a que garantizara la integridad física y mental de las 16 personas.

37. El Grupo de Trabajo lamenta no haber recibido respuesta a esa comunicación por parte del Gobierno, que tampoco solicitó una prórroga del plazo de respuesta con arreglo a lo previsto en el párrafo 16 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

#### **Deliberaciones**

38. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

39. El Grupo de Trabajo ha establecido en su jurisprudencia su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones (véase A/HRC/19/57, párr. 68). En el presente caso, el Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente.

40. Por tanto, el Grupo de Trabajo examinará las alegaciones de la fuente una por una.

#### *Categoría I*

41. La fuente indicó que las 16 personas habían sido detenidas el 17 de enero de 2019 sin que lo hubiera ordenado una autoridad judicial, que no habían sido informadas de los motivos de la detención y que no se les habían comunicado sin demora las acusaciones formuladas en su contra. Además, 7 de ellas habían sido expulsadas a la República Democrática del Congo, pero no habían podido entrar en el país porque las autoridades congoleñas no habían considerado válidos sus documentos de identidad. Por tanto, esas 7 personas fueron devueltas a las instalaciones de detención policial en que se las había recluso en Mozambique.

42. El Grupo de Trabajo recuerda que, en virtud del artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. En el artículo 9, párrafo 2, del Pacto, se establece que toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de esta. Para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico, no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención. Además, como ya

ha señalado el Grupo de Trabajo, una detención es arbitraria si se lleva a cabo sin informar a la persona de los motivos por los que está siendo detenida<sup>1</sup>.

43. En vista de los hechos, el Grupo de Trabajo considera que no existía fundamento jurídico para la detención sin orden judicial de las 16 personas y, por tanto, se vulneró el artículo 9, párrafo 1, del Pacto.

44. El Grupo de Trabajo observa asimismo que, según explicó la fuente, las 16 personas eran refugiados o solicitantes de asilo. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, las 16 personas están protegidas contra la devolución a un territorio en el que peligren su vida o su libertad<sup>2</sup>. Sin embargo, el Grupo de Trabajo observa que, según explicó la fuente, el representante de la Dirección Provincial de Migración de Cabo Delgado había indicado, en marzo de 2019, que el intento de expulsión se había llevado a cabo para dar cumplimiento a una decisión oral del Ministro del Interior en la que se ordenaba la expulsión de las 16 personas por su presunta participación en una manifestación que había tenido lugar en el campamento de Maratane el 5 de octubre de 2015 y durante la que se habían causado daños a las instalaciones del campamento. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno las mantiene recluidas en el contexto de una devolución.

45. El Grupo de Trabajo recuerda también que el principio de no devolución está firmemente asentado en el derecho internacional consuetudinario y convencional en relación con la protección del derecho a buscar asilo, consagrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El principio de no devolución también se establece en la Convención de la Organización de la Unidad Africana por la que se Regulan los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África (1967), en cuyo artículo 2, párrafo 3, se dispone que “[n]inguna persona será sometida por un Estado miembro a medidas tales como la negativa de admisión en la frontera, la devolución o la expulsión que la obligarían a regresar o a permanecer en un territorio donde su vida, su integridad corporal o su libertad estarían amenazadas”. En el artículo 5 del mismo instrumento se establece que toda repatriación debe ser voluntaria, lo que afianza el principio de no devolución.

46. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que, en vista de la explicación de las autoridades sobre la detención y la privación de libertad, toda devolución constituiría una vulneración del derecho internacional. El Grupo de Trabajo considera que no solo no se expuso ningún fundamento jurídico a los interesados en el momento de su detención, sino que, además, la orden de expulsión era ilegal y no debió haberse ejecutado. Ello constituyó otra vulneración del artículo 9, párrafo 1, del Pacto.

47. El Grupo de Trabajo considera también que el hecho de no informar a los interesados sobre los motivos de la detención y no comunicarles las acusaciones entraña una vulneración del artículo 9, párrafo 2, del Pacto.

48. Además, el Grupo de Trabajo observa que, desde que fueron detenidos, los refugiados no han tenido la oportunidad de impugnar la legalidad de su privación de libertad, lo que supone una conculcación del artículo 9, párrafos 3 y 4, del Pacto y también una vulneración del derecho a un recurso efectivo, consagrado en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

49. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la detención y la privación de libertad de las 16 personas carecen de fundamento jurídico, son arbitrarias y se inscriben en la categoría V.

<sup>1</sup> Véanse, por ejemplo, las opiniones núm. 46/2019, párr. 51, y núm. 10/2015, párr. 34.

<sup>2</sup> El principio de no devolución es aplicable a los refugiados y también a los solicitantes de asilo, como estableció el Comité Ejecutivo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por ejemplo, en su conclusión núm. 6 (XXVIII) (1977), relativa a la no devolución, en la que reafirmó la importancia fundamental del principio de no devolución de las personas que, reconocidas o no oficialmente como refugiadas, podían ser objeto de persecución si se las devolvía a su país de origen (párr. c)).

*Categoría III*

50. La fuente indica que las 16 personas participaron en una manifestación en 2015 y fueron acusadas de causar daños a bienes del Estado. Sin embargo, en mayo de 2017, el Tribunal Provincial de Nampula declaró a las 16 personas no culpables de los daños causados en el campamento.

51. El Grupo de Trabajo observa que, pese a esa absolución, la detención del 17 de enero de 2019 y la subsiguiente privación de libertad de los interesados están vinculadas a esa acusación de 2015. El Grupo de Trabajo recuerda que, de conformidad con el artículo 14, párrafo 7, del Pacto, nadie podrá ser sancionado por un delito del que ya haya sido absuelto mediante sentencia firme. El Grupo de Trabajo concluye, pues, que la detención constituye una vulneración de ese artículo.

52. El Grupo de Trabajo considera también que la privación de libertad de los interesados vulnera su derecho a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto. Si el Estado no ha demostrado su culpabilidad, es ilegal que los expulse para castigarlos indirectamente, de otro modo, por esa acusación. El Grupo de Trabajo considera que esto constituye un grave abuso de los medios procesales que pone en tela de juicio la independencia del poder judicial, consagrada en el artículo 14, párrafo 1, del Pacto, y el debido respeto de las resoluciones judiciales.

53. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo concluye que la vulneración del artículo 14, párrafos 1, 2 y 7, del Pacto es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad de estas personas carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

*Categoría IV*

54. La fuente explicó que las 16 personas habían sido detenidas el 17 de enero de 2019 y permanecían recluidas desde entonces. Además, el 23 de enero de 2019, las autoridades habían intentado expulsar a 7 de ellas a la República Democrática del Congo, pero se les había denegado la entrada y habían sido devueltas a Mozambique. El Grupo de Trabajo considera que el intento fallido de trasladar por la fuerza a 7 de los interesados entrañó una vulneración del principio de no devolución, que, como ya se ha explicado, es aplicable en este caso. Cabe concluir lo mismo respecto de la privación de libertad en el contexto de la devolución. Además, la fuente explicó que las 16 personas no habían tenido la oportunidad de solicitar la revisión judicial de su privación de libertad. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que han sido privadas de libertad durante un período prolongado sin poder acogerse a la revisión judicial. En consecuencia, el Grupo de Trabajo concluye que su detención y privación de libertad con vistas a la expulsión son arbitrarias y se inscriben en la categoría IV.

55. Dada la condición de las víctimas, el Grupo de Trabajo considera que procede remitir el caso al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.

56. Por último, el Grupo de Trabajo considera que, habida cuenta del presunto uso de violencia durante la detención y de las condiciones de la privación de libertad, es necesario remitir el caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para que lo investigue más a fondo.

**Decisión**

57. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Songolo Abwe, Bahome Amisi, Mulenda Amisi, Ababa Anito, Dax Byamungu, Dominique Nepanepa Kahenga, Kibunga Kasindi, Mwenelwata Kitungano, Sikabwe Kiza, Charles Anzuruni M'massa, Sukuma Maenda, Mathias Mafataki Mahano, William Riziki, Amisi Shomari, Kaskil Sumail y Jacque Nsimba Vela es arbitraria por cuanto contraviene los artículos 8, 9, 10 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 2, párrafo 3, el artículo 9, párrafos 1, 2, 3 y 4, y el artículo 14, párrafos 1, 2 y 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, III y IV.

58. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Mozambique que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los Sres. Abwe, Bahome Amisi, Mulenda Amisi, Anito, Byamungu, Kahenga, Kasindi, Kitungano, Kiza, M'massa, Maenda, Mahano, Shomari, Sumail y Vela y la Sra. Riziki sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

59. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner en libertad inmediatamente a los Sres. Abwe, Bahome Amisi, Mulenda Amisi, Anito, Byamungu, Kahenga, Kasindi, Kitungano, Kiza, M'massa, Maenda, Mahano, Shomari, Sumail y Vela y la Sra. Riziki y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional. En el contexto actual de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la amenaza que plantea en los lugares de reclusión, el Grupo de Trabajo exhorta al Gobierno a que adopte medidas urgentes para garantizar la puesta de libertad inmediata de esas personas.

60. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los Sres. Abwe, Bahome Amisi, Mulenda Amisi, Anito, Byamungu, Kahenga, Kasindi, Kitungano, Kiza, M'massa, Maenda, Mahano, Shomari, Sumail y Vela y la Sra. Riziki, y a que adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

61. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y al Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes para que tomen las medidas correspondientes.

62. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

### **Procedimiento de seguimiento**

63. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

a) Si se ha puesto en libertad a los Sres. Abwe, Bahome Amisi, Mulenda Amisi, Anito, Byamungu, Kahenga, Kasindi, Kitungano, Kiza, M'massa, Maenda, Mahano, Shomari, Sumail y Vela y la Sra. Riziki y, de ser así, en qué fecha;

b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a los Sres. Abwe, Bahome Amisi, Mulenda Amisi, Anito, Byamungu, Kahenga, Kasindi, Kitungano, Kiza, M'massa, Maenda, Mahano, Shomari, Sumail y Vela y la Sra. Riziki;

c) Si se ha investigado la violación de los derechos de los Sres. Abwe, Bahome Amisi, Mulenda Amisi, Anito, Byamungu, Kahenga, Kasindi, Kitungano, Kiza, M'massa, Maenda, Mahano, Shomari, Sumail y Vela y la Sra. Riziki y, de ser así, el resultado de la investigación;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Mozambique con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

64. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

65. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la



presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

66. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado<sup>3</sup>.

*[Aprobada el 1 de mayo de 2020]*

---

<sup>3</sup> Resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.